

El periódico #1 en Puerto Rico en **lectoría** y **circulación**.

el **V**ocero de Puerto Rico

> LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 > NUM 14751 > SAN JUAN, PUERTO RICO • WWW.ELVOCERO.COM

GRATIS

ESCENARIO
Ricky Martin se defiende tras nueva querrela de sobrino >P17

La verdad no tiene precio



> Archivo / EL VOCERO

LUMA GASTÓ MENOS EN SACAR VEGETACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS >P6

CRECIENTE DESAFÍO ANTE LA CORRUPCIÓN

➤ Fraude, malversación y conflicto de interés son las tres modalidades que se repiten en los esquemas identificados, revela la investigación del Centro de Gobernanza Pública, que analizó los informes de la Oficina del Contralor correspondientes a una década.

>P3/4



DEPORTES

Jugadores reclaman participación económica

Solicitan al BSN ser remunerados por el uso comercial de la imagen. >P22

ECONOMÍA

LA ROBÓTICA

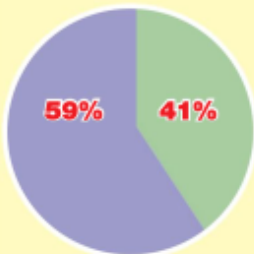
como una opción real ante la falta de personal médico en la Isla.

>P14



TERMÓMETRO DE LA VERDAD

¿Está de acuerdo con la orden del gobernador Pierluisi de izar las banderas a media asta por la muerte de Isabel II?



Si
No

Queremos conocer tu opinión sobre la corrupción gubernamental. Participa del sondeo entrando a www.elvocero.com.

Búscanos en las redes sociales



@voceropr



El Vocero de Puerto Rico



@elvocero

Hoy en la sección de **Opinión**



Katherine Anguiera



Ldo. Iván Rivera



ESCENARIO

Encuentro de "guerreros" en SER

Miembros del programa de Wapa visitan centro en San Juan. >P16



DEPORTES

Sintoniza hoy Medio Tiempo Deportivo

El equipo de deportes de EL VOCERO vuelve al aire para discutir temas de actualidad >P22

Diez años bajo la sombra de la corrupción

➤ Radiografía a los informes de auditoría de la Oficina del Contralor en la última década muestra cómo la deshonestidad administrativa está arraigada en el gobierno

Yaritza Rivera Clemente
>Yrivera@elvocero.com
@YaritzaClemente

El incremento exponencial de casos de corrupción en Puerto Rico que evidencian los recientes arrestos de políticos y contratistas privados por las autoridades federales, genera preocupación porque visibiliza que esta conducta delictiva ha escalado hasta las altas esferas del gobierno y afecta la legitimidad de las instituciones públicas.

Investigadores del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) presentaron a EL VOCERO el estudio Desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía, en el que hicieron una radiografía de los informes de auditorías publicados por la Oficina del Contralor en la última década, y que según los datos recopilados, muestra cómo este delito está arraigado al gobierno.

Entre el 1ro de julio de 2010 al 30 de junio del 2019, la Oficina del Contralor publicó 1,042 informes de las auditorías realizadas en agencias de gobierno, de las que surgen 215 hallazgos de "carácter serio" que fueron referidos al Departamento de Justicia y/o a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Entre los 215 hallazgos, los investigadores del CGPC identificaron 127 incidentes que implican acciones, actos u omisiones que representan alguna modalidad de corrupción. Sin embargo, señalan que estos potenciales incidentes no representan los únicos actos de corrupción ocurridos en el periodo analizado y conjeturan que otros cientos de casos "escaparon la visibilidad de los auditores" del Contralor.

El análisis establece que de los 127 incidentes de potencial corrupción, 94 (74%) fueron documentados en los municipios, 32



Eneida Torres de Durand es la investigadora principal del estudio. >Nahira Montcourt / EL VOCERO



Los grandes intereses han capturado al gobierno y estos últimos casos (de corrupción) lo han hecho evidente porque ha llegado a la figura más alta del gobierno.

Eneida Torres
Directora ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

(25%) en la rama ejecutiva y uno (1%) en la judicial. Los patrones identificados, en su mayoría corresponden a fraude, malversación y conflicto de interés, tres modalidades que se repiten en esquemas recientemente revelados por las autoridades federales.

"Los grandes intereses han capturado al gobierno y estos últimos casos (de corrupción) lo han

hecho evidente porque ha llegado a la figura más alta del gobierno. Así que nosotros podríamos estar frente a la captura del Estado por grupos de interés particular, políticos y empresariales, y ese es el sello más amplio de lo que es un estado fallido", sostuvo la directora ejecutiva del centro, Eneida Torres.

Saúl Pratts, catedrático en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y Rafael Durand, director de la investigación, urgieron a cambiar el paradigma en la lucha contra la corrupción como estrategia para frenar el aumento en la incidencia de estos casos.

"El andamiaje anticorrupción tiene un problema, y es que se queda mirando al empleado público y al gobierno como ente que da el servicio, sin tomar en cuenta la privatización, y por eso es que la gente tiene una gran desconfianza, porque el sector privado que-

da impune en la mayoría de estos casos (de corrupción)", explicó Pratts, al abordar las fisuras en la estructura gubernamental.

Los casos de corrupción más notorios en Puerto Rico —como el de la exgobernadora Wanda Vázquez y el exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado— involucran en los esquemas expuestos por las autoridades federales a personas del sector privado, y tienen similitud en las modalidades imputadas, entre ellas el soborno y la conspiración.

Del análisis de los informes del Contralor se desprende que de los 127 incidentes identificados, 66 (52%) corresponden a fraude, 43 (33.9%) a malversación, 10 (7.9%) a conflictos de interés, tres (2.3%) a nepotismo, tres (2.3%) a padrinazgo, uno (0.8%) a soborno y uno

Pase a la página 4

Viene de la página 3

(0.8%) a colusión.

En los municipios

El informe refleja que en los municipios el 54.6% de los casos se agrupan en cotizaciones falsas, contratación de ingenieros y/o arquitectos sin licencia o corporaciones no autorizadas a prestar los servicios, apropiación ilegal de fondos públicos, aumento de salario al alcalde y/o dietas a legisladores sin cumplir con el proceso dispuesto, y trámites ilegales relacionados al manejo de recursos humanos.

Según la investigación, los 11 municipios identificados con el mayor número de incidentes señalados durante el 2010 al 2019, son Barranquitas con seis, seguido de Guayanilla, Ponce, Mayagüez y Bayamón con cuatro cada uno. Los municipios de Cidra, Morovis, Guaynabo, Guánica, Camuy y Canóvanas tienen tres incidentes cada uno.

El investigador Durand explicó que los señalamientos en Barranquitas —municipio que encabeza la lista— incluyen pagos por servicios no prestados, contratación de profesionales y/o corporaciones no autorizadas, funcionario del municipio firmando contratos y certificando comprobantes de pago a familiares, y nombramiento de familiares de funcionarios sin las dispensas requeridas.

Añadió que el 55% de los incidentes recurrentes en el Ejecutivo son por pago indebido del proveedor o cobro indebido del proveedor, trámites ilegales relacionados a recursos humanos y conflictos de interés en la otorgación de contratos.

Durand agregó que el 57.2% de los casos en las corporaciones públicas son por utilización de equipo y propiedad pública para beneficio de un ente privado y/o político, pago indebido de compensación por despido, y/o bonificaciones, entre otros.

"No debe ser sorpresa que muchas de estas cosas terminaron en Justicia o en la OEG y no se procedió con ningunos cargos", expresó.

Impacto en la economía

Durand alertó sobre el costo socioeconómico que tiene la corrupción en Puerto Rico, porque profundiza la desigualdad social y la pobreza, y genera desconfianza en la ciudadanía.

"La economía de Puerto Rico evidencia una reducción de su producto interno bruto (PIB) real. Para el 2021, fue de un 2%, pero esa tendencia viene ocurriendo desde el 2005", puntualizó Durand.

Indicó que entre los años 2017 y 2018 —cuando Puerto Rico quedó destruido por el huracán María— la caída en el PIB fue más marcada con 4.13% y 4.61%, respectivamente. **EL VOCERO** reseñó hace un mes, que las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en la Isla se han estimado en el 10% del presupuesto gubernamental, según datos del Contralor.

Durand apuntó a que las deficiencias en el andamiaje económico —dependiente del flujo de fondos federales—, la inflación y el alza en la gasolina, "tienen consecuencias en nuestras posibilidades de encaminar una verdadera y sostenible recuperación económica".

Agregó que el desarrollo económico se ha complicado en la Isla a causa de la corrupción que promueve el uso de los recursos limitados en contratos y nombramientos que, según entiende, son innecesarios.

Los tres investigadores coincidieron en que es impostergable mejorar la gobernanza y la capacidad administrativa de las instituciones con mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas.

Además, plantearon que aunque hay una estructura jurídica —que tiene un Código Anticorrupción— no ha sido suficiente para frenar la deshonestidad administrativa.

Torres, quien es la investigadora principal del estudio, destacó que "no es un problema de legislación lo que tenemos frente a nosotros... es un problema de gerencia gubernamental y de malas prácticas enraizadas, porque el veneno es el clientelismo político y el inversionismo político que ha deteriorado aceleradamente la administración pública".

Aseveró que mejorar la gobernanza y fortalecer el sistema anticorrupción requiere de establecer prioridades claras y estimular la cultura de integridad pública basada en la meritocracia.

"Ningún gobierno puede operar de manera centralizada; los gobiernos tienen ya que depender de los insumos de los ciudadanos y las comunidades, y tener un plan de país de lo que van a ejecutar", concluyó.

El 77.1% de las personas opinó que los casos han aumentado

Los investigadores Rafael Durand Aldea y Saúl Pratts Ponce de León urgieron a cambiar el paradigma en la lucha contra la corrupción
>Mahira Montecourt / EL VOCERO



Elevada la percepción de la corrupción

Yaritza Rivera Clemente
>Yrivera@elvocero.com
@Yaritzaclemente

Cuando las autoridades arrestan funcionarios de gobierno por corrupción, inmediatamente la clase política repudia con indignación los actos imputados, pero pocas veces se conoce la otra cara de la moneda: la percepción que tiene la ciudadanía sobre este problema que se ha agudizado con los años.

La perspectiva sobre los patrones, la modalidad y el nivel de corrupción gubernamental, quedó revelada en la encuesta desarrollada por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC), como parte de la investigación Desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía, cuyos investigadores presentaron en exclusiva a **EL VOCERO**.

Rafael Durand, director del estudio, explicó que la encuesta se realizó entre agosto y octubre de 2020, a través de la plataforma Survey Monkey, y participaron 810 miembros de asociaciones profesionales que agrupan abogados, médicos, analistas financieros, contadores públicos autorizados (CPA), ingenieros, planificadores, e industriales, entre otros sectores.

"El verdadero desarrollo económico en Puerto Rico se complica por la corrupción gubernamental, que promueve los recursos limitados del Estado en contratos y nombramientos totalmente innecesarios, proyectos que no son viables, servicios costosos, casi todos a cambio de financiamiento o prebendas a políticos", detalló Durand en la presentación de los hallazgos.

Los resultados de la encuesta muestran que el 98.39% (794) de los encuestados considera que la corrupción en Puerto Rico es un problema significativo en la sociedad, mientras que el 96.53% (779) plan-

tea que el gobierno está actuando mal en la lucha contra la corrupción. Además, 77.21% (620) opinó que en comparación con hace cinco años, el nivel de corrupción ha aumentado.

También, el 72.37% (584) de los encuestados considera que la corrupción es un elemento propio de la política en la Isla. Igualmente, el 47.82% (384) de los consultados opinó que se percibe mayor corrupción en las agencias del gobierno central, seguido del 36.86% (296) que entiende es la Legislatura, 9.71% (78) las corporaciones públicas, 1.25% (10) la judicatura y 4.36% (35) los municipios.

Sobre cuál debe ser el castigo a los funcionarios y políticos que cometen actos de corrupción, el 70.26% (567) seleccionó la destitución de empleo y radicación de cargos criminales, mientras que el 41.39% (334) favoreció el encarcelamiento y la multa, y el 3.84% (31) opinó que deben ser suspendidos de empleo y sueldo por un periodo de tiempo.

Además, el 77.82% (628) de los encuestados afirmó que los legisladores se exponen más a recibir sobornos. El 61.63% (498) seleccionó "fiscalía federal" cuando se le preguntó por la institución en la que más confía para luchar contra la corrupción gubernamental. También el 77.24% (621) calificó como pobre el desempeño de las instituciones del País en el último año.

A esto se añade que el 75.19% (606) considera que las agencias anticorrupción no están protegidas de interferencias político partidistas, mientras el 92.95% (752) coincide en que los políticos son los responsables de la corrupción en Puerto Rico.

El 52.05% (418) de los encuesta-

dos proyectó que en los próximos cinco años habrá más corrupción en Puerto Rico.

Ante esta percepción, Saúl Pratts, catedrático en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), planteó que para eliminar la interferencia político partidista en las agencias anticorrupción, se debe comenzar eliminando que los cuerpos directivos sean nombrados por el gobernador de turno, con el consentimiento del Senado.

"Podría ser que los decanos de las facultades de derecho busquen personas con la capacidad para ser, por ejemplo, secretario de Justicia y tengan unos criterios objetivos, siendo el primero de ellos que no estén vinculados a campañas políticas ni a puestos políticos, ni a gobiernos electivos.

Entonces, sugieren cinco nombres y que haya una elección de pueblo", abundó.

Poca transparencia

En cuanto a la transparencia, el 64.14% (517) de los encuestados reconoce que los ciudadanos tienen derecho de acceso a la información pública y a los documentos gubernamentales básicos. Mientras que el 79.21% (640) considera que los ciudadanos no reciben respuesta a la solicitud de acceso a información en un tiempo razonable.

En esta encuesta, el 41.9% de los encuestados son mujeres y el 58.10% son hombres, de 18 años en adelante; la mayoría (46.70%) tiene 60 años o más, con experiencia laboral de sobre 30 años (42.22%).

La encuesta se realizó mediante una serie de preguntas de selección múltiple/abiertas.

Dato relevante

El 52.05% (418) de los encuestados proyectó que en los próximos cinco años habrá más corrupción en Puerto Rico.